

cia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 30 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito*

*instrucción general. Las del primer*

isten en que nadie sea juzgado por privativas y por Tribunales especiales; el segundo, en que nadie puede ser o deudas de un carácter meramente pueda ejercer violencia para reclamar derecho; que los Tribunales estén expeditos para administrar justicia esta sea gratuita, quedando, en consecuencia, abolidas las costas judiciales.

la garantía del art. 13, nada hay, ar, puesto que ni indirectamente ha ion al caso, por no haber sido juz- C. Rosete por leyes privativas, pues sirvieron de fundamento al fallo de uejaron, son generales y obligato- dos; ni por Tribunales especiales, d de que los ordinarios del Estado, ron los que lo sentenciaron, no son iderarse bajo ningún aspecto con cter.

oco debe ni hacerse mención de los meros puntos del art. 17, por no te- ienor rose con el acto reclamado. ues, solo me ocuparé de la abolición ostras judiciales, que es propiamente e ha de atender para sentenciar el

con el carácter de Escribano de diligencias autorizara los actos del Juez, en la cuestión particular que se ha indicado: que el C. Lic. José María Ibarrarán, habiendo sido designado por el propio Tribunal para tazador de las costas, no se opuso escepcion por ninguna de las partes, y que el Tribunal Superior del Estado condenó al C. Rosete al pago de todas las costas causadas en la 1ª instancia, en virtud de las facultades que lo son inherentes.

Usted se ha de servir determinar que el amparo no procede por falta de motivo para decretarlo, ó lo que es lo mismo, por no existir en el acto reclamado ninguna violación de las garantías individuales que se invocan en el escrito de queja, según lo pasa brevemente á demostrar.

Las garantías que en este artículo se citan, son las que otorgan los arts. 13 y 17

*de la Constitución, por el C. Mariano Rosete Sandoval, contra lo determinado por el Tribunal de 1ª instancia de esa Ciudad, sobre que debe pagar las costas del Escribano D. Miguel Domínguez Toledano, causadas en el juicio que promovió el representante del Lic. D. Manuel Zamacona, y las del Abogado que las tazó.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por el C. Mariano Rosete, contra el Tribunal de 1ª instancia de esta Capital, por exigirle el pago de unas costas que devengó el Escribano C. Domínguez Toledano, en el juicio de despojo que en su contra siguió el C. Lic. Manuel María de Zamacona; supuesto su estado, que es el de alegar, ante usted dice:

Que constando de autos, que el C. Domínguez Toledano no es el Secretario nato del Tribunal, contra el que se ha dirigido la queja, sino que fué nombrado por voluntad y consentimiento de las partes, para que

de la C ro, con leyes p y las d preso p civil; n mar su siempre y que e secuen

Sob que de ce rela gado el las que que se rias á en virt que fu de con ese car

Tam tres pr ncer el

Así, de las lo que

presente recurso con la debida justificacion.

Sobre este punto, manifestaré á usted, C. Juez, que el precepto constitucional relativo, no tiene una significacion tan lata, que pretenda eximir á las partes que pleitean de todos los gastos que se eroguen en su juicio, que es en vigor lo que se entiende por costas, porque entonces los abogados no tendrian derecho á cobrarles sus honorarios, ni los escribanos públicos aucion para percibir lo que les correspondiera por los diversos testimonios, por ejemplo, que los ministraran; ni aun la renta del papel sellado, tendria accion á pagarse el valor de los sellos en que pusieran sus demandas. El artículo lo que exige es, que la justicia sea gratuita y que no se paguen costas á los jueces que la administran.

Hasta ahora no hay ley que precise lo que constituye las costas judiciales; generalmente se creó, que son las que devengan ó devengaban los jueces y sus secretarios, en razon de su empleo. Pues bien; con este precedente, hay que considerar que ni los jueces ni sus secretarios, pueden percibir ni un centavo por costas; pero esto no puede decirse con respecto á los Escribanos que intervienen en los juicios, sin el nombramiento de secretarios, que son llamados por los litigantes para que les presten trabajos muy personales, que no están retribuidos por el erario público.

Parece fuera de duda que este es el espíritu del artículo de que vengo ocupándome, pues de ser lo contrario, todos los escribanos, y en general todos los curiales que tuvieran ingerencia en los negocios de particulares, recibirían el petardo de que al fin de cada uno de ellos, los interesados se rehusaran á pagarles sus honorarios, con el mismo pretexto que hoy se hace valer por el C. Rosete, lo que en estricta justicia no puede aceptarse.

Así es que debemos convenir, en que á los escribanos que no tengan nombramiento en forma, de secretarios de algun juzgado, se les ha de retribuir su trabajo por las per-

sonas que los ocupen, sin infraccion del art. 17 Constitucional, supuesto lo antes dicho, que no previene que los litigantes no hagan ningun gasto en los negocios que emprendan, sino que los jueces les administren justicia gratuitamente. Luego estando el C. Miguel Dominguez Toledano en este caso, deberán pagar sus costas los C. Zamacona y Rosete, que lo ocuparon; pero en virtud de que este último salió sentenciado por el Tribunal competente á cubrirlas todas, á él le corresponde hacerlo, sin que sean violadas en su perjuicio las garantías individuales del artículo mencionado de la Constitucion.

Tambien se deduce con toda exatitud, que si al C. Dominguez Toledano se le pagan sus costas, con mucha mayor razon se le han de pagar al abogado tazador, por ser ésta persona estraña en el juicio y en lo particular ocupada por el Juez de los autos, con el consentimiento y aprobacion de las partes.

Por todo lo expuesto, el suscrito creó que el amparo intentado por el C. Mariano Rosete Sandoval, contra el Tribunal de 1ª instancia de este Distrito, no procede, y es de denegársele en los términos que tiene ya indicados al principio. Sírvasse usted C. Juez, así decretarlo, en conformidad con lo que previene el art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Zaragoza, Julio 24 de 1874.—*E. Sanchez.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Puebla de Zaragoza, Setiembre 5 de 1874.  
—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Mariano Rosete Sandoval, contra lo determinado por el Tribunal de 1ª instancia de esta Capital, sobre que está obligado á pagar las costas del Escribano C. Miguel Dominguez Toledano causadas como autuario en el juicio que siguió en su contra el representante del C. Lic. Manuel Zamacoma, así como las del abogado que las reguló.

Visto el informe de la autoridad responsable, en virtud del que hace presente, que el Juzgado se fundó al dar su resolución, en la ejecutoria del de 2ª instancia que lo condenó al pago de todas las costas sin distinción de ningún género. Visto el parecer del Promotor fiscal quien opina porque no debe otorgarse el amparo, fundándose en que el Escribano fué ocupado por una y otra parte. Vistos los autos del negocio en que se causaron las costas, con cuanto demas debió verse y tenerse presente, y

Considerando: que el quejoso ha intentado el recurso, apoyado en los artículos 13 y 17 de la Constitución, por haberse vulnerado en su perjuicio las garantías que otorgan, por la autoridad contra quien ha dirigido su queja, con el hecho de obligarlo á pagar costas judiciales; que consta justificado que el representante del C. Lic. Zamacona al promover el interdicto de despojo contra el C. Rosete, el escrito en que dedujo su acción lo entregó al Escribano C. Domínguez para que diera cuenta, de lo que resulta, que quien lo ocupó para que actuara en el juicio; fué el actor; que aun cuando el demandado ha ya ocurrido á él en el curso del juicio, esto no le obliga á remunerar sus trabajos, porque de la misma manera hubiera ocurrido al Secretario del Tribunal al no ser el actuario aquel; que estando abolidas las costas judiciales, la condenación al pago de ellas ha importado en perjuicio del C. Rosete, infracción del artículo 17 de la Constitución invocado; y que de no tener obligación de pagar las costas del Escribano, tampoco la tiene de pagar las del abogado que las reguló cuya regulación ha carecido de objeto.

Por estas consideraciones y en atención á lo prevenido por el artículo 1º de la ley de 26 de Enero de 1869, reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Mariano Rosete Sandoval, contra lo determinado por el Tribunal de 1ª instancia de esta Capital, sobre que

debe pagar las costas del Escribano C. Miguel Domínguez Toledano causadas en el juicio que le promovió el representante del C. Lic. Manuel Zamacona y las del abogado que las tazó.

Hágase saber; publíquese esta resolución en la forma acostumbrada y remítase el expediente á la Suprema Corte de Justicia para la revisión, previa la reposición del papel común que se ha usado, con el sellado correspondiente.

El C. Juez de Distrito definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firmó.—Antonio Rivero.—Ante mí.—Antonio García Mozqueira.

Es copia que certifico para su inserción en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Puebla de Zaragoza, Setiembre 7 de 1874.  
—Antonio G. Mozqueira, secretario.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Diciembre 10 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por el C. Mariano Rosete Sandoval contra el Tribunal de 1ª instancia de esa Ciudad que lo declaró obligado á pagar las costas del Escribano C. Miguel Domínguez Toledano causadas en el juicio sobre despojo que promovió al quejoso el C. Ramon Alvarez en representación del C. Lic. Manuel Zamacona, y las del C. Lic. José Mª Ibarra quien nombrado tazador, cobró derechos por la regulación de costas á que procedió, y

Considerando: que el actor en el juicio de despojo fué quien ocupó al Escribano C. Domínguez Toledano, como pudo haber ocupado al Secretario; y que si el reo admitió los servicios de aquel, fué en virtud de que el actor lo escogió para que diera cuenta, como pudo haber admitido los del Secretario si este hubiera sido ocupado por el actor, y en consecuencia, el Escribano Domínguez actuó en este juicio mas bien con el caracter de

sustituto del Secretario que con el de actuario ó Escribano de diligencias, y por lo mismo, las costas devengadas por él deben considerarse como judiciales, y el cobro de ellas importa la violación de la garantía á que se refiere el artículo 17 de la Constitución general:

Considerando, respecto de las que cobra el C. Lic. Ibarra, que no estando el C. Rosete obligado á satisfacer costas al Escribano C. Dominguez Toledano, tampoco debe estarlo á satisfacer las del tasador que las reguló; de conformidad con lo que dispone el artículo 107 de la Constitución general se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio á 5 de Setiembre último, por el Juez de Distrito de Puebla, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Mariano Rosete Sandoval contra lo determinado por el Tribunal de 1ª instancia de Puebla, sobre que debe pagar las costas del Escribano C. Miguel Dominguez Toledano, causadas en el juicio que promovió el representante del C. Lic. Manuel Zamacona y las del Abogado que las tazó.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los fines consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Anza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Naerja.*—*Luis Velásquez.*—*M. Zavala.*—*José G. Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 12 de 1874.—*Lic. Enrique Landá*, oficial mayor.

TOMO VI.—PARTE II.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Puebla, por Cayetano Pedraza contra el C. Jefe político de Chalchicomula que lo condenó á la pena de muerte.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Ignacio Martinez Pinillos, como defensor del reo Cayetano Pedraza, contra el C. Jefe político del Distrito de Chalchicomula, por haberlo condenado á sufrir la pena capital, supuesto su estado que es el de alegar, ante U. dice:

Que en vista de la causa formada á dicho reo, que aparece en autos como prueba solicitada por este Ministerio, cualquiera se persuade que Cayetano Pedraza ha sido juzgado por los delitos de plagio, robo y homicidio, con entero arreglo á la ley vigente de saltadores y plagiaros; y que bien esclarecidos los hechos, fué sentenciado á sufrir la última pena, con arreglo á esta misma ley, por la autoridad contra quien se ha dirigido la queja.

En la expresada causa se ve tambien, que los procedimientos de la autoridad responsable estan conformes con la ley, y que al reo le ha otorgado aun garantías constitucionales que estan en suspenso para los saltadores y plagiaros.

En consecuencia el Promotor no encuentra violadas las garantías individuales que se invocan en el escrito de queja, en atencion á que todas ellas segun tiene indicado, permanecen suspensas por la ley de Mayo de 1874; ni motivo para que se decrete el amparo que se solicita, una vez que el acto que se reclama no está comprendido en ninguno de los casos de que habla el art. 19 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Por lo tanto, pide á U. se sirva declarar que no procede el recurso, y que el expc-